



## TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 21 de enero de 2021

### AUTO INTERLOCUTORIO Nro. 010

Magistrada Ponente: PATRICIA FEUILLET PALOMARES

MEDIO CONTROL	DE	REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE		ALBERTO MENDOZA CHENG Y OTROS <a href="mailto:arquitectomendozal@gmail.com">arquitectomendozal@gmail.com</a>
DEMANDADO		NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
ABOGADOS QUE PRESENTAN EL INCIDENTE	QUE EL	PATRICIA CRUZ GRAJALES JORGE ELIECER FLÓREZ MEZA <a href="mailto:patriciacruzg@hotmail.com">patriciacruzg@hotmail.com</a>
RADICACIÓN		76001-23-33-006-2018-00022-00
ASUNTO		RESUELVE INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS

#### I.- ASUNTO

Procede el Despacho a pronunciarse sobre el incidente de regulación de honorarios, presentado por los abogados Patricia Cruz Grajales y Jorge Eliecer Florez Meza contra los demandantes dentro del proceso de la referencia.

#### II.- ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado ante la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca<sup>1</sup>, los abogados Patricia Cruz Grajales y Jorge Eliecer Flórez Meza presentaron incidente de regulación de honorarios en contra de Construcciones y Diseños Integrales Ltda. – CODINTE LTDA. y Alberto Mendoza Cheng, quienes fueran sus mandantes dentro del proceso de reparación directa adelantado en contra de la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación.

Como fundamento de su petición, señalaron que el señor Alberto Mendoza Cheng, en calidad de representante legal, gerente y socio de CODINTE LTDA. y gerente de SEOP LTDA., les otorgó poder para adelantar la demanda de la referencia. Que, en efecto se efectuaron todos los trámites tendientes a llevar a su fin el aludido proceso, no obstante, cuando éste se encontraba pendiente de presentar alegatos de conclusión, el señor Alberto Mendoza Cheng les revocó el poder conferido. A partir de lo anterior, solicitan que se ordene el reconocimiento y pago de los honorarios profesionales causados por su gestión.

#### III. CONSIDERACIONES

El anterior Código Contencioso Administrativo, al igual que la Ley 1437 de 2011, establecen que las cuestiones accesorias que se presenten dentro de un proceso se

---

<sup>1</sup> Folios 1-3.

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN:	76001-23-33-006-2018-00022-00
DEMANDANTE:	ALBERTO MENDOZA CHENG Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS

tramitarán como incidente y, a su turno, prevén que para el trámite, la preclusión y efectos de los incidentes se seguirá lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.

A su vez, las citadas disposiciones indican que en los aspectos no regulados en dicho estatuto se deberá acudir a las disposiciones de las normas del procedimiento civil, hoy Código General del Proceso, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, es del caso precisar que la reclamación de honorarios a través de incidente se encuentra regulada en el artículo 76 del Código General del Proceso, disposición que para el efecto señala que el apoderado a quien se le haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior.

El citado precepto en el inciso segundo determina:

*“Dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien se le haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. Para la determinación del monto de los honorarios el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en este código para la fijación de las agencias en derecho. Vencido el término indicado, la regulación de los honorarios podrá demandarse ante el juez laboral”.*

De la norma en cita, se infiere que para que opere el reconocimiento y regulación de honorarios al abogado al que se le hubiera revocado el poder, es necesario que se interponga un incidente, que se tramitará en la forma prevista por el Código General del Proceso. Dicho incidente deberá presentarse en los 30 días siguientes a la notificación del auto que admite la revocatoria del poder.

De igual manera, para la procedencia del incidente de regulación de honorarios se requiere de una manifestación de voluntad por parte de quien tiene la facultad de revocar el poder.

La revocatoria del poder pone fin a la representación en juicio, con pleno efecto respecto de los sujetos procesales y de los terceros intervinientes, pero no desconoce el contrato de gestión; el que, de existir, rige de manera preferente las relaciones entre poderdante y apoderado y al que éstos se deberán remitir para arreglar sus diferencias; entre ellas, aquellas generadas por razón de la revocatoria injustificada del poder. Así las cosas, el abogado que concluye su labor en juicio a causa de la revocatoria del poder, sin perjuicio de los derechos derivados del eventual contrato de gestión, puede solicitarle al Juez de la causa que liquide sus honorarios teniendo en cuenta, simplemente, la labor realizada<sup>2</sup>.

Sobre el tema, la Alta Corporación<sup>3</sup> ha señalado lo siguiente:

*“Al respecto conviene precisar los siguientes aspectos: i) según la norma legal en cita, para la prosperidad del incidente de regulación de honorarios debe acreditarse la existencia de la obligación por parte de la persona que revocó el poder con el apoderado que promueva el correspondiente incidente y; ii) en todo caso, se debe respetar la limitante prevista en la norma en relación con la determinación del monto que llegare a resultar por concepto de honorarios, consistente en que, en cualquier caso, dicha suma no podrá superar el valor de los honorarios pactados.*

---

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 10 de septiembre de 2014, Consejera ponente: Dra. **LUCY JEANNETTE BERMUDEZ BERMUDEZ**, radicación No. 11001-03-28-000-2011-00059-00.

<sup>3</sup> Ibidem.

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN:	76001-23-33-006-2018-00022-00
DEMANDANTE:	ALBERTO MENDOZA CHENG Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS

A partir de lo anterior, se debe señalar que en audiencia de pruebas celebrada el 27 de marzo de 2019<sup>4</sup>, este despacho resolvió, de conformidad con el memorial obrante a folio 545 del expediente, admitir la revocatoria del poder otorgado a los abogados Patricia Cruz Grajales y Jorge Eliecer Flores Mesa, conforme a lo establecido en el artículo 76 del Código General del Proceso, únicamente en lo que refiere a la representación judicial del señor Alberto Mendoza Cheng. La solicitud de regulación de honorarios fue presentada dentro de la oportunidad legal, el 10 de abril de 2019.

Ahora bien, el Despacho pasa a realizar el pronunciamiento que en derecho corresponde a efectos de determinar la retribución que por concepto de honorarios solicitan los incidentantes.

Para empezar, el escrito incidental da cuenta de que la solicitud de regulación de honorarios profesionales se fundamenta en la existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre el señor Alberto Mendoza Cheng, en calidad de poderdante, y los abogados Patricia Cruz Grajales y Jorge Eliecer Florez Meza, en calidad de apoderados. Este convenio estaba dirigido a iniciar, desarrollar y llevar hasta su término proceso de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Policía Nacional y Rama Judicial, tendiente a obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la destrucción de dos maquinarias en el sector de Citronela, área rural del Distrito de Buenaventura<sup>5</sup>.

A partir de lo anterior, es del caso señalar que el Consejo de Estado ha sostenido frente al Contrato de Prestación de Servicios o Contrato de Gestión de los honorarios profesionales, lo siguiente:

*“(…) Regularmente el valor de los honorarios profesionales, además de los demás derechos y obligaciones, es acordado entre el abogado y su cliente -persona que pretende comparecer al proceso con el fin de hacer valer un derecho subjetivo (derecho de postulación)- con anterioridad al inicio del proceso o de los procesos respectivos, a través de la celebración de un contrato de mandato o de prestación de servicios profesionales.*

*Así pues, comoquiera que el apoderado y su poderdante regulan su relación a través de la celebración de un tipo contractual, en el cual, claro está, se incluyen cláusulas tendientes a determinar el monto al cual deben ascender los honorarios del abogado o representante, resulta apenas concordante que la ley procesal fije como límite, para aquellos eventos en los cuales se pretenda que se regulen los honorarios en el proceso donde el abogado intervino, que el monto que pueda resultar del trámite del incidente no deba desconocer el valor previsto en el correspondiente contrato de mandato o de prestación de servicios, aún cuando el respectivo acuerdo de voluntades fuere pactado de manera verbal (...).”*

*En efecto, para la regulación o fijación del monto al cual deben ascender los honorarios de un Abogado cuando se promueve el incidente de que trata el artículo 69 del C. de P. C., resulta determinante como requisito sine qua non el **contrato**, sea este escrito o verbal, por medio del cual tanto el poderdante, como su apoderado, hubieren fijado los términos de su relación negocial”<sup>6</sup>.*

En este punto, esta Agencia Judicial considera importante destacar que, conforme al Código General del Proceso, la gestión desarrollada por los procuradores judiciales al interior de los respectivos procesos se sustenta en el poder que se les haya otorgado en

<sup>4</sup> Folios 551-552.

<sup>5</sup> Folios 4-6 del cuaderno incidental.

<sup>6</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 18 de enero de 2013, Consejera Ponente: Dra. **BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ**. Radicación: 1999-00871-01 (0825-12),

la forma autorizada en el artículo 74 de dicho estatuto y, generalmente, lo concerniente a su remuneración está soportado en un “contrato de mandato”, al que se refiere el canon 2144 del Código Civil, según el cual, los *“servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a la que está unida la facultad de responder y obligar a otra persona, respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato”*.

En lo atinente a las prestaciones a favor del “mandatario”, el precepto 2143 ibídem establece que el *“mandato puede ser gratuito o remunerado. La remuneración es determinada por convención de las partes, antes o después del contrato, por la ley o por el juez”*, y acorde con la regla 3ª del artículo 2184 del estatuto civil, el *“mandante es obligado (...) [a] pagarle la remuneración estipulada o usual”*.

En el *sub lite*, entre las partes, apoderados y poderdante, existe pacto expreso sobre la remuneración del iniciador del asunto, consistente en el pago del 50% de las resultas del proceso, es decir, que los honorarios profesionales se pactaron a cuota *litis*, entendida como un porcentaje en función de lo obtenido.

Respecto de esta modalidad de convenio y pago de honorarios, la Corte Suprema de Justicia ha señalado:

*“La modalidad de la contratación de la gestión profesional a cuota litis admitida por ambas partes, indica de entrada para la Corte que los contratantes colocan de por medio la eventualidad de un resultado económico concreto y estimable, que de darse será el parámetro único para establecer el valor de los honorarios que se generan a favor de quien ha puesto al servicio del mandante su gestión, su diligencia y sus conocimientos”<sup>7</sup>.*

Se trata, por consiguiente, no de establecer un valor fijo al que se accederá de todas maneras, sino de un alea en tanto los honorarios dependen del éxito de la gestión. En el presente asunto, el demandante y los profesionales del derecho manifestaron sin equívocos que los honorarios se pactaban en cuota *Litis*, y dejaron plasmado en el contrato de prestación de servicios profesionales lo siguiente:

***“HONORARIOS PROFESIONALES: LOS CONTRATANTES Y/O MANDANTES cancelarán a los APODERADOS por concepto de honorarios, de acuerdo a las gestiones detalladas en la Cláusula Primera, el 50% de las resultas del proceso de REPARACIÓN DIRECTA, ya sea ante el Juzgado Administrativo o en su defecto en el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA que por reparto corresponda conocer o que por cuantía sea remitido al competente”***

En este sentido, a efectos de determinar si resulta procedente el reconocimiento de los honorarios solicitados por la parte incidentante, corresponde al Despacho enumerar sus actuaciones, así:

1. La abogada Patricia Curz Grajales, conforme a los poderes de representación otorgados por los demandantes dentro del proceso de la referencia, el 16 de enero de 2018, interpuso demanda de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, Ejército Nacional y Policía Nacional, con el fin de que fueran resarcidos los perjuicios ocasionados a causa de la destrucción de dos máquinas de propiedad de las sociedades CODINT LTDA. y SEOP LTDA., representadas por el señor Alberto Mendoza Cheng, hecho ocurrido el 12 de noviembre de 2015. El conocimiento de este medio de control le correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia de 21 de marzo de 2001, Magistrado Ponente: Dr. **NICOLÁS BECHARA SIMANCAS**, referencia: expediente No. 1100122030002001-0010-10.

<sup>8</sup> Folios 167-220.

2. Una vez admitida la demanda<sup>9</sup>, la abogada Patricia Cruz Grajales aportó el comprobante de depósito judicial, conforme a lo ordenado en el auto admisorio<sup>10</sup>.
3. La abogada Patricia Cruz Grajales asistió a la audiencia inicial convocada por esta Corporación para el día 6 de diciembre de 2018<sup>11</sup>.
4. El abogado Jorge Eliecer Florez Mesa asistió a la audiencia de pruebas llevada a cabo el 29 de enero de 2019<sup>12</sup>.
5. La abogada Patricia Cruz Grajales estuvo presente en la audiencia de pruebas que se realizó el 27 de febrero de 2019<sup>13</sup>.
6. Encontrándose el proceso en etapa probatoria, el demandante Alberto Mendoza Cheng revocó el poder conferido a los abogados Jorge Eliecer Flórez Mesa y Patricia Cruz Grajales<sup>14</sup>. En el escrito de revocatoria de poder, el demandante dijo que entre él y sus apoderados se presentaron una serie de pleitos judiciales frente a los cuales estos actuaron de forma desleal. También manifestó que anexaba una declaración extrajudicial para demostrar la existencia de una denuncia penal en la que se encuentran inmiscuidos los apoderados, una queja disciplinaria y una acción de tutela. No obstante, en el plenario no obran los aludidos soportes.

Según lo expuesto, resulta claro que los abogados Jorge Eliecer Flórez Mesa y Patricia Cruz Grajales tienen derecho a percibir honorarios, pues, durante el trámite del proceso, intervinieron conforme al poder que se les confirió, y en esa condición adelantaron las gestiones antes aludidas hasta la etapa probatoria, como consta a lo largo del expediente. Vale la pena acotar que si bien el señor Alberto Mendoza Cheng adujo que la revocatoria del poder se dio debido a la actuación desleal de los apoderados, no acreditó dicha situación.

Debe tenerse en cuenta que en el contrato al que se hizo referencia en líneas anteriores se pactaron honorarios a *cuota litis*, por el 50% de lo que se llegue a reconocer en el proceso. No obstante, en el *sub examine* los apoderados actuaron solamente durante la primera instancia hasta la etapa probatoria, no hasta finalizar el proceso. En ese sentido, debe tenerse en cuenta lo preceptuado en el artículo 366, numeral 4 del Código General del Proceso, que dice:

*“4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.* (Negrita y subrayas fuera del texto).

En el mismo sentido, el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, dispone en el artículo 2 lo siguiente:

---

<sup>9</sup> Folio 222.

<sup>10</sup> Folio 225.

<sup>11</sup> Folios 466-471.

<sup>12</sup> Folios 528-533.

<sup>13</sup> Folios 537-539.

<sup>14</sup> Folio 545.

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN:	76001-23-33-006-2018-00022-00
DEMANDANTE:	ALBERTO MENDOZA CHENG Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS

*“ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”. (Negrita y subrayas fuera del texto)*

Conforme a las disposiciones citadas, el pago del porcentaje pactado (50% de las resultas del proceso), se generaría si los apoderados hubieran actuado durante todo el proceso, empero, sus actuaciones llegaron hasta la etapa probatoria en primera instancia.

En este orden de ideas, sin desconocer la naturaleza consensual y dispositiva del contrato de prestación de servicios, contenido en el documento escrito aportado en el presente trámite incidental, se considera que los abogados Jorge Eliecer Flórez Mesa y Patricia Cruz Grajales tienen derecho, por concepto de honorarios, al 20% del valor de las pretensiones que se le llegaren a reconocer al incidentado, señor Alberto Mendoza Cheng en la sentencia que ponga fin al proceso de reparación directa que con la representación judicial de los profesionales del derecho, se instauró en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Policía Nacional y Rama Judicial ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Esto teniendo en cuenta la duración de la gestión realizada, que culminó en la etapa probatoria en primera instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

### **RESUELVE**

**ARTÍCULO ÚNICO: REGULAR** el valor de los honorarios de los abogados Jorge Eliecer Flórez Mesa y Patricia Cruz Grajales, en la suma equivalente al 20% (cuota *litis*) de lo que se llegue a reconocer al demandante Alberto Mendoza Cheng, dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado nro. 76001-23-33-006-2018-00022-00, de acuerdo a las consideraciones expuestas. El 20 % es para los dos abogados no para cada uno.

**Notifíquese y cúmplase,**

**La magistrada,**



**PATRICIA FEUILLET PALOMARES**